

CONTENIDO

Editorial: Año crítico

Actualidad: Nicaragua en crisis terminal

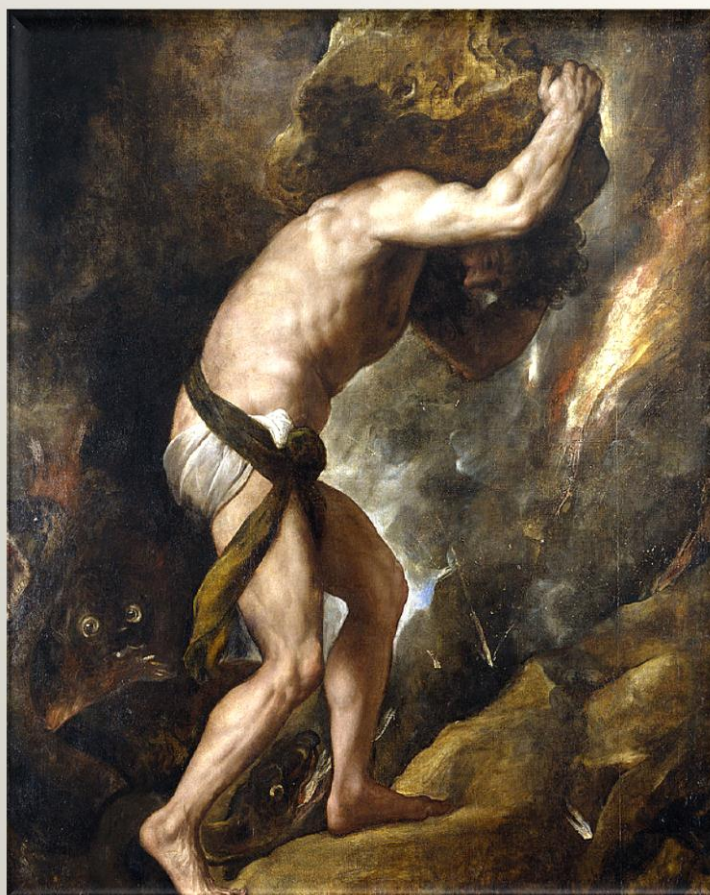
Informe: América Latina.
El uso de la tierra

*Elaborado por el polo latinoamericano
de Reinventerra del Centro de
investigaciones interdisciplinario sobre
desarrollo internacional y sociedad*

Cirdis-Uqam

REINVENTERRA

TERRITORIO RECURSOS NATURALES ACTORES



Editorial

El 2018 va al primer semestre y la región se ha tambaleado como una frágil embarcación en la tormenta. Elecciones presidenciales en marcos de tensión extrema, (Colombia, México, Brasil, Venezuela). A ello se agregan crisis de régimen como la de Nicaragua, ajustes de cuentas conflictivos alrededor de sucesiones presidenciales (Ecuador Bolivia). Creciente inestabilidad en Argentina, gobiernos afectados por crisis de corrupción (Perú, Honduras, Guatemala, Chile)

E

ditorial: Año crítico

Nuestros países parecen condenados a repetir la historia, tal Sísifo obligado, como ilustra la imagen de la portada. Pese a las nuevas posibilidades que se habían generado: revigorización del regionalismo abierto, incremento de reservas presupuestarias, programas sociales, dinamismo económico y disminución de la pobreza. Pero se acabó la bonanza de las materias primas, se invirtió la tendencia a la reducción de la pobreza, se redujo el crecimiento, vuelve el endeudamiento y las crisis políticas se están extendiendo.

Para muchas visiones desde el exterior, Latinoamérica es sinónimo de realismo mágico e inestabilidad. Desde el interior las cosas se ven como una lucha histórica por generar instituciones democráticas y de control social para evitar derivas dictatoriales, de opresión y desigualdad. La ola de elecciones y de gobiernos en un periodo de retorno de la bonanza económica, desde la década pasada, generó esperanzas en avanzar en la lucha histórica. Más allá de los relatos y las banderas de unos y otros en cada país se puede hacer un balance de lo acontecido. Pero solo se puede hacer si las sociedades tienen las condiciones básicas para realizar el debate democrático, ejercer el disenso, y sacar las conclusiones con sus consecuencias políticas.

Este no es un ejercicio de salón. Cuando se intenta hacer el ejercicio con un poder que lo niega, cuando crece el descontento y más aún, si lleva movilización social nacional, conflicto y represión, el balance se convierte en una crisis de poder.

América Latina ha dado muestras considerables de este tipo de crisis. En 18 años, desde el 2000, han caído 11 presidentes electos. De ellos, 8 por movilización de la sociedad y revueltas cívicas, 3 por crisis internas del grupo en el poder e institucionales. El hecho que ello no implicara golpes militares clásicos conservadores, hizo pensar que al menos la democracia tenía una esperanza, ya que después de las crisis volvían a realizarse elecciones permitiendo el recambio.

Pero ese puente de plata parece resquebrajarse estrepitosamente. Las fallas estructurales han comenzado a revelarse.

El marco democrático se ha revelado frágil a la hora de soportar recambios de gobierno, tensiones políticas y la necesaria confrontación de posiciones. Se carece de un acuerdo básico en torno a respetar las reglas del juego.

Las elecciones han quedado, en muchos casos como una débil legalidad frente a la fuerte deslegitimación provocada por gobiernos poco rigurosos en combinar el ser electos con gobernar democráticamente. En México, Colombia, Brasil, Venezuela se juegan derivas peligrosas, con altos niveles de violencia y crisis institucional.

Por otro lado, la corrupción ha hecho estragos, se pueden discutir las causas y las responsabilidades pero el hecho es innegable. Han gangrenado instituciones, partidos y liderazgos, sin distinción de fronteras. No es un misterio que la política ha estado siempre relacionada con los intereses económicos y en particular el de los poderosos. Esto es así no por algún tipo de determinismo histórico, se debe a que el capital es una fuente de poder y de influencia sobre la toma de decisiones. De allí que todo sistema político y gobierno muestren parte de su naturaleza en la manera en que se relacionan con

ese tipo de poder. Este último, el capital, parece ganar la partida en la medida misma que gobiernos partidos y liderazgos se alejan de sus sociedades.

No es menor el papel de los conflictos en esta etapa crítica. Los recursos políticos se agotan rápidamente. Cada vez más se ve solo a la policía y a la judicialización frente a los conflictos. De las viejas dinámicas sectoriales queda poco o nada. Es claro que los conflictos se conectan con cuestiones, de modelo social y económico. Parece que en la medida que se carece de regulaciones, densidad del sector público y se imponen lógicas exclusivas de grupos económicos la desnudez del entramado es más flagrante.

Se trate de cuestiones ambientales, pronto se combinan con territorios y modelos de manejo de recursos naturales. Que sea Incahuasi en Bolivia, la concesión canalera en Nicaragua, el fracking y la minería en Argentina, por citar algunos casos. La huelga de camioneros en Brasil, revela la privatización del sector petrolero. No hay sector donde no aparezcan estas vinculaciones y con pocas soluciones que ofrecer. Al desgaste del ciclo político parece acompañarle una suerte de anomia en política económica que se limita a poner en práctica viejas recetas.

Hay que reflexionar sobre los caminos que conducen allí. También hay destinos de Sísifo y contra eso solo queda tratar de evitar que la piedra te aplaste.

Angel Saldomando

A ctualidad

Nicaragua: La Ventana

Por Ángel Saldomando

Lo que ocurre en Nicaragua puede sorprender por la intensidad y la masividad de la revuelta contra el régimen de Daniel Ortega, un régimen que recorrió aceleradamente la senda del autoritarismo y la corrupción. Sin embargo, puede decirse que hubo diagnósticos que anunciaron este desenlace, fueron tal vez pocos pero muy consistentes en el tiempo y en el contenido. No es difícil encontrarlos. El que no pudieran constituirse en una lectura alternativa relevante fue producto de un acomodo forzado, debido a procesos de captura de la institucionalidad, represión y necesidad de sobrevivencia de la población. Más de una vez la respuesta reservada a un análisis crítico era "Si te hago caso pierdo el trabajo y me harán la vida imposible" O dicho más popularmente a la nica: "Hay que navegar con bandera de pendejo" Es decir, hacerse el tonto para sobrevivir. Mientras las rutinas del poder se mantuvieran, como siempre ocurre en estos casos más aun con las dictaduras, el día de mañana parecía ser igual al anterior e intimidaba. La revuelta rompió todo eso, abrió la interrogante sobre qué pasará, de qué lado estoy y ello libera todo el malestar acumulado.

El régimen en la lógica del pasado quiere mantener el orden pero este está cuestionado así como sus responsables. La magnitud de la

crisis abre la posibilidad de un cambio de régimen e interroga tanto sus posibilidades como los caminos para lograrlo. Obligado por los efectos negativos de una represión inaudita, a saber: destrucción total de la imagen del régimen, aumento de la movilización y mayores exigencias de democratización y justicia; han debido aceptar una dialogo nacional para intentar aflojar la presión. De un lado el régimen y su aparato, del otro una mayoría social de campesinos, pobladores urbanos, estudiantes, iglesia, comunicadores, empresarios, mujeres. La agenda del diálogo está en preparación así como los tiempos y las formas. Sin embargo, no se puede afirmar todavía que esta instancia de mediación llegue a ponerse en práctica efectivamente. La propia iglesia por medio de su instancia mediadora, la conferencia episcopal, se ha dado un plazo de un mes luego del eventual inicio para verificar si el ejercicio es útil y si hay verdaderos resultados. Un ejercicio difícil que navegará seguramente entre episodios de represión y movilización con resultados inciertos. La situación está lejos de definirse.

Sin embargo pueden identificarse algunos aspectos que desde ahora son un nuevo capital político en el país y que también pueden leerse en clave de otras situaciones. Se puede mencionar que la movilización ha generado varios aspectos significativos:

Se ha creado una dinámica de alianzas sociales inorgánicas pero no por eso menos reales y visibles con potencial para crecer y consolidarse. Esto desborda las prácticas de control centralizado y de aparato del régimen. Se ha

formado una capacidad de articular nivel local y nacional como nunca vista. Lo que relaciona luchas sectoriales que por primera vez encontraron una formulación nacional. Se ha elaborado un relato, contra discurso oficial, que se perfila como una reivindicación de modelo de país, aun si carece obviamente de precisiones.



La "gente", antes dispersa, sin coordinación, sin poder reconocerse en una dinámica común, tiene ahora representatividad de luchas, actores en desarrollo, esbozo de un modelo de país (aunque sea solo para afirmar lo que no se quiere), bandera y un camino de crecimiento. El desenlace de la crisis actual, en cualquiera de sus posibles escenarios de continuidad del poder o de cambio de régimen, deberá contar con este nuevo capital político. Sobre este capital se refunda la acción colectiva y se generan nuevos espacios de reivindicación y construcción de sentido. Todas estas cuestiones el poder autoritario las controló y reprimió para imponer su fachada de "pueblo presidente" de país subordinado a la hegemonía del relato que mezclaba en un delirio las imágenes omnipresentes de presidente divino, pueblo, familia, partido, sandinismo, cristianismo.

El nuevo aprendizaje político y social, así como el cruel y revelador desengaño operado en todos los sectores, sin límites de edad, historia personal o extracción

social ha escapado a la férula del régimen.

Esto constituye su primera y quizá estratégica derrota. Este es sin duda el mayor peligro para el régimen y el que tratará de destruir, sin duda. Los tiempos del nuevo periodo histórico que se ha abierto en Nicaragua, cortos o más prolongados y sus costos son impredecibles. Pero el camino está trazado. En tiempos en que en muchos países los partidos políticos, las instituciones, han caído en el descrédito, se vuelve nuevamente vigente que la única regeneración posible se origina en la acción colectiva, en una sociedad en movimiento. En ningún lado ello garantiza un resultado pero es la única condición para refundar el debate, el disenso, la democracia, el sentido político constructivo del conflicto.

Gobiernos de derecha o de izquierda, o lo que se quiera decir con ello, ganan elecciones pero no gobiernan democráticamente y menos aún dialogan con sus sociedades en busca del bien común. Peor aún, se inscriben en una gestión de instrumentalización institucional, de corrupción y de represión. América latina, en su mayoría, carece de los mínimos compromisos sociales para resolver este problema a bajo costo. Nicaragua vuelve a transitar esta dura senda. La ventana histórica que se abrió con la caída de la dictadura de Somoza y luego cerrado con la descomposición de las viejas elites y del aparato orteguista, se ha nuevamente abierto. Una nueva oportunidad para el país y una lección más para la región. (Publicado por leMonde diplomatique ed Chile. y Confidencial.com.ni).

LA INSURRECCIÓN DE ABRIL

Por Elvira Cuadra

Abril de 2018 tendrá desde ahora un lugar especial en la historia reciente de Nicaragua y será recordado como el mes en el que la juventud nicaragüense, con la entrega de su sangre, hizo una de las más altas ofrendas de amor al país. En abril, miles de jóvenes acompañados de otros miles de ciudadanos en todo el país, se fueron a las calles para hacer sentir su voz reclamando el restablecimiento de la democracia y las libertades frente a un gobierno que se desenmascaró frente al mundo como una cruel dictadura.

La chispa: Indio Maíz y el INSS

Las chispas que encendieron a una sociedad aparentemente dormida fueron el mal manejo que hizo el gobierno del siniestro en la reserva biológica conocida como Indio Maíz a inicios de abril y la reformas al sistema de seguridad social decididas de manera unilateral por el gobierno a mediados del mismo mes y ejecutadas a través del decreto presidencial 03-2018. A inicios del mes, la reserva biológica Indio Maíz, una de las más grandes e importantes del país por su extensión y porque hace parte del Corredor Biológico Mesoamericano, tomó fuego. Las voces de alerta de diferentes organizaciones ambientalistas y de los gobiernos indígenas rama y kriol no fueron escuchadas por el gobierno, de manera que el fuego se extendió rápidamente calcinando la flora y fauna de ese rico ecosistema.

A mediados del mes, el día 16 de abril, el gobierno Ortega Murillo decidió de manera unilateral reformar el sistema de seguridad social promulgando el decreto presidencial 03-2018 que en sus partes medulares incrementó las tasas de cotización para trabajadores y empleadores en un 7 y 22.5 % mensual, respectivamente; además que estableció descontar un 5 % mensual a las pensiones por vejez, invalidez y discapacidad. Al emitir el decreto, Ortega hizo a un lado la alianza que desde hace varios años tenía con el gran capital nacional y generó un malestar nacional.

Rebelión ciudadana y represión

Las protestas no se hicieron esperar. La primera de ellas fue auto convocada para el día 18 de abril pero cuando comenzaron a agruparse en el lugar conocido como Camino de Oriente en una de las vías principales de la ciudad capital, Managua, fueron atacados por la policía y los llamados grupos de choque del gobierno. Al siguiente día las protestas se extendieron a las ciudades más importantes del país, entre ellas: León, Matagalpa, Estelí, Masaya, Granada, Chinandega, Rivas, Bluefields. Las principales universidades de Managua como la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Politécnica (UPOLI), se sumaron gradualmente a las protestas y desde el primer momento, los jóvenes estudiantes fueron atacados por la policía y las fuerzas de choque del gobierno.

Las consecuencias de la represión

Los distintos organismos defensores de derechos humanos han contabilizado entre 44 y 63 jóvenes asesinados, una cifra que de momento no puede ser confirmada porque en las morgues de los hospitales todavía hay cadáveres que no han sido entregados a sus familiares, hay casi una decena de jóvenes en cuidados intensivos producto de las heridas recibidas y cerca de 20 jóvenes desaparecidos. Los jóvenes asesinados oscilaban entre los 20 y 30 años, la mayoría eran estudiantes, pero también eran trabajadores de la maquila o de pequeños comercios. El más joven de ellos, Alvaro Conrado, tenía 15 años. El 24 de abril, cerca de 200 jóvenes detenidos durante los primeros días de las protestas fueron liberados por la Policía. En denuncias realizadas posteriormente por los jóvenes ante organizaciones de derechos humanos, confirmaron que fueron torturados y maltratados por la policía.

Escenarios posibles

Al cierre de este análisis, la jornada de movilización y protesta no ha cerrado su ciclo, pero es indudable que en Nicaragua se ha abierto un nuevo e inédito momento histórico. La explosión social provocada por diez años de descontento e insatisfacciones acumuladas con el gobierno sorprendió a todo el mundo, comenzando por el mismo gobierno, a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional.

En el futuro inmediato es posible visualizar tres escenarios, todos a cuál más complejo e incierto.

Hay varios escenarios de desenlace y todos son complejos, así como inciertos. El más optimista es uno donde los Ortega Murillo y su grupo de allegados, reconozcan que están en una situación precaria y accedan a una salida pacífica, adelantando las elecciones y asegurando un proceso electoral transparente. Ese escenario es poco probable porque significa exponerse a juicios por los asesinatos, abusos y corrupción de estos años. Es perder su inmensa cuota de poder y no están dispuestos a arriesgar nada.

El segundo escenario podría incluir un acuerdo sobre su salida del gobierno mediante un proceso electoral transparente en el 2021, que es cuando corresponde realizar las próximas presidenciales. Ese escenario es favorable para los Ortega Murillo, pero no para el resto de la sociedad nicaragüense porque significa conceder la postergación de la demanda de justicia y reparación a las víctimas, así como el castigo a los culpables. Les daría tiempo de proteger sus negocios y cubrir la huella de sus crímenes y corrupción. Este escenario parece poco factible. Además, éste y el anterior dependen mucho de un gobierno Ortega Murillo con buena voluntad para negociar y encontrar una salida pacífica a la crisis.

El escenario menos favorable sería aquel en el que el gobierno se mantiene en su posición de fuerza a pesar de su debilidad y utiliza el diálogo como un mecanismo político para ganar tiempo y dismantlar la protesta y movilización. Aparentemente, a esto es a lo que apuestan. Todas sus comparecencias públicas apuntan en esa dirección, así como lo que se sabe sobre las acciones de represalia que están realizando.

En este escenario, la voluntad política es nula.

Algunos aspectos que merecen un análisis más a fondo y que son importantes, es el de los liderazgos políticos alternativos. La protesta ha dado vida a rostros y posiciones nuevas, especialmente entre los jóvenes, así como nuevas formas de organización y prácticas políticas; pero todas ellas no son suficientes para liderar una propuesta política alternativa coherente para el país. Ese es un proyecto en construcción.

El gobierno que antes parecía muy fuerte tiene una gran presión interna. Es evidente que hay fisuras y disputas fuertes entre ellos, especialmente entre el grupo proclive a Rosario Murillo y la llamada vieja militancia del FSLN que aún permanece dentro del partido. Otro aspecto importante, y tal vez el decisivo, es la capacidad de presión social y movilización de la gente. Al parecer hay mucha decisión de parte de amplios sectores de población, pero habría que ver cuánto tiempo más se puede mantener el ciclo de movilización. (Resumen del artículo publicado por el boletín Perspectivas 123, del centro de investigaciones de la comunicación. Cinco, de Nicaragua).

I nforme América Latina

El uso de la tierra

Hasta comienzos de los sesenta, el aumento de producción agrícola latinoamericana se logró fundamentalmente por expansión del área cultivada. El 80% del incremento anual de cultivos durante la década de los cincuenta tenía su origen en el aumento de la extensión del área cultivada; en cambio, en la década de los setenta, con excepción de Brasil, sólo 25% del incremento es atribuible a esa causa. La superficie cosechada en América Latina se expandió en alrededor de 40 millones de hectáreas entre 1950 y 1975, pasando de 53 millones de hectáreas registradas en el periodo 1950-1955 a 93 millones en 1975, con un incremento medio anual del 2.3%. Sin embargo, este ritmo esconde una tendencia decreciente: el área cosechada aumentó en más de 20 millones de hectáreas en la década de los cincuenta, o sea, 3% anual aproximadamente, en 14 millones durante los años sesenta (2% anual) y 8 millones de hectáreas (1.9%) en la primera mitad de los setenta.

Si bien hay diferencias en las estadísticas disponibles sobre los usos del suelo en América Latina, las tendencias generales coinciden: el aumento de las tierras dedicadas a los cultivos, frecuentemente asociados al concepto de tierras arables, y los pastizales y la muy fuerte disminución de la superficie forestal de la región.

La CEPAL señala que las tierras latinoamericanas totalizan una superficie de 2 004.6 millones de hectáreas, cifra que se mantiene de 1970 a 1987. De esta superficie sólo 7.5% es arable, 1.5% se usa en cultivos permanentes, 28% son pastizales, 48.2% bosques y el resto tiene otros usos. Las cifras, que datan de 1989 y cubren hasta 1987, al compararlas con la de 1970 confirman las tendencias

acotadas en el párrafo anterior, esto es, aumento de las superficies arables y de pastizales. Las primeras se incrementan en más de 30.4 millones de hectáreas: de 120 millones en 1970 a 150.7 millones de hectáreas en 1987, aumentando así su importancia relativa de 6% a 7.5%. Las superficies dedicadas a pastos aumentan de 529.6 millones a 563.5 millones de hectáreas, y su importancia relativa como forma de usos, de 26.4% a 28.1%. La tendencia opuesta se da con respecto a las superficies boscosas, que se reducen de 1 039 millones a 967 millones de hectáreas, una merma de 71.8 millones de hectáreas, equivalente a la desaparición de 16.9% del bosque existente en 1970, con lo que su importancia como forma de uso del suelo se contrae de 51.8% a 48.2%. El área dedicada a cultivos permanentes ha aumentado levemente y la ocupada por otros usos queda prácticamente inalterada.

El desglose en grandes categorías de uso de tierras no permite apreciar las peculiaridades de diferentes formas de uso, ni de sus implicaciones ecológicas, ambientales, económicas y sociales. Así se constata que del aumento de tierras cultivables la mayor parte, según la CEPAL cerca de 12.5 millones de hectáreas se destinaron a cultivos modernos orientados principalmente a la exportación.

Estos cultivos suponen por lo general elevada mecanización, uso de insumos industriales en cantidades importantes, particularmente agroquímicos; riego, variedades mejoradas, etc., pueden también revelar el cambio de un cultivo a otro, lo cual puede eventualmente cambiar la magnitud y características de los efectos sobre el medio, en particular el

suelo, o acarrear implicaciones socioeconómicas adicionales.

Análisis más detallados revelan que una tendencia importante de la agricultura latinoamericana ha sido la conversión de cultivos tradicionales como frijol y maíz a «nuevos» cultivos como oleaginosos, en particular soya y sorgo. Se calcula que de la tierra incorporada al cultivo entre 1970 y 1980 cerca de 62% fue para oleaginosas, específicamente soya, y que otro 24% se destinó a trigo, arroz y sorgo. Entre 1978 y 1983 el área destinada al cultivo de soya aumentó en dos millones de hectáreas. El aumento de los cultivos de exportación ha ido asociado con la reducción del uso de la tierra para cultivos tradicionales como el frijol negro en Brasil o el maíz en México.

Se observa también una clara relación entre deforestación y aumento de pastizales para ganadería: entre 1974 y 1983 la producción ganadera en América Latina aumentó 28%. De las tierras de los Andes orientales colombianos incorporadas entre 1960 y 1980 sólo 16% fueron para cultivos, mientras que 54% se dedicaron a la producción ganadera y 31% no fueron utilizadas del todo. Más de la mitad de los nuevos ranchos ganaderos son propiedades de más de 500 hectáreas. Desde la perspectiva espacial, no cabe duda de que las actividades agropecuarias son las que tienen mayor incidencia sobre el medio ambiente dadas sus extensiones y, por lo tanto, el espacio afectado, la magnitud de las explotaciones y el hecho que América Latina es fundamentalmente una región centrada en la agricultura.

Los impactos que causan las modificaciones del suelo por la intervención humana se han ido magnificando con la creciente mecanización, la aplicación de



agroquímicos, en particular fertilizantes sintéticos, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, así como el uso de variedades genéticas mejoradas de elevado rendimiento, el aumento del riego, etcétera.

Los procesos de intensificación de cultivos son relativamente recientes en América Latina ya que la región disponía de uno de los mayores potenciales de reservas de tierras susceptibles de uso agropecuario, aun cuando es preciso hacer notar que este argumento es controvertido. La CEPAL, en el documento citado, estimaba que el potencial de tierras para uso agropecuario de Latinoamérica era de 576 millones de hectáreas, cifra muy significativa, habida cuenta que la FAO señalaba que a comienzos de los ochenta había en la región 163 millones de hectáreas bajo cultivos permanentes o temporales.

Según la FAO, Sudamérica tiene la menor incidencia de áreas críticas, en el sentido de limitación de tierras, con relación a cualquier región del mundo, al mismo tiempo que tiene la mayor proporción, 46%, de suelos aptos para agricultura sin riego (*rainfed agriculture*). La extensión de Sudamérica, 1 770 millones de hectáreas, con relación a su población se traduce en una relativa abundancia de tierras potencialmente cultivables; en 1975 sólo 15% de esa tierra potencialmente cultivable era cultivada y sólo tres países cultivaban más de un quinto de su área: Ecuador 44%, Argentina 55% y Chile 85.5%. Aun con bajos niveles de insumos (uso mínimo de fertilizante), los recursos de tierra de Sudamérica serían capaces, dice la FAO, de alimentar seis veces a su población de 1975, calculada en ese entonces en 216 millones de habitantes; con un nivel intermedio de insumos (alrededor de 80 kilogramos por hectárea en cultivo de cereales), la capacidad sería para alimentar 24 veces esa población, y con una agricultura altamente tecnificada e intensiva (cerca de 160 kilogramos por hectárea de fertilizantes en cultivo de cereales) tendría capacidad para

alimentar una población 57 veces superior. Claro, añade FAO, que eso obligaría a convertir más de la mitad de los 943 millones de hectáreas de bosques y matorrales, lo que no sólo es indeseable, sino poco probable. El mismo estudio señala que ningún país de Sudamérica se encuentra en situación crítica de producción de alimentos a ningún nivel de insumos (bajo-intermedio-alto). Sin embargo, esto no quiere decir que no haya áreas críticas: éstas existen en algunas zonas del Caribe y del interior de Brasil; pero en su mayoría se localizan en las zonas andinas, caracterizadas por su alta vulnerabilidad a la desertificación y la degradación de suelo y una aguda escasez de leña para combustible.

Las tierras arables representan aproximadamente 8.5% de la superficie de la región con variaciones acentuadas; así, por ejemplo, en el Caribe las tierras arables representan 25.9% de la superficie caribeña, mientras que en los países andinos el porcentaje es de sólo 5%. En todo caso los suelos que realmente ofrecen un potencial agrícola representan alrededor de 16% de la superficie total.

Algunas estimaciones señalan que la superficie cultivable de América Latina podría ampliarse hasta alcanzar entre 27% y 32% del total; sin embargo, esta ampliación de tierras cultivables se haría a costos crecientes. Hay que distinguir entre la incorporación propiamente dicha de nuevas tierras y la recuperación de tierras degradadas. Por ejemplo, se calcula que la incorporación de tierras en áreas desérticas costaría alrededor de 20 000 dólares por hectárea; pero la recuperación de terrazas y bancales abandonados en las zonas andinas altas de Perú y Bolivia sería del orden de los 2 000 dólares por hectárea, y un costo similar tendría la recuperación de tierras salinizadas en las áreas costeras regadas del Perú.

Actualmente 8.7% de la tierra de la región está bajo cultivo y, a pesar de que no existen limitaciones importantes desde el punto de vista físico o químico, las limitaciones de

agua en zonas áridas y semiáridas frenan los intentos de expansión de la agricultura. Esta situación es característica de México, cuyas zonas áridas y semiáridas serían perfectamente aptas para la agricultura si se dispusiera de riego.

Uno de los problemas ambientales importantes de la región está asociado a la expansión de la economía ganadera y la consiguiente conversión de suelos con cultivos tradicionales a la producción de alimento para ganado (soya y sorgo) y la conversión forestal a pastizales. Entre 1970 y 1987 las tierras para cultivo y pastoreo aumentaron en 70 millones de hectáreas. Las dedicadas a pastoreo aumentaron a expensas de bosques nativos, que disminuyeron en aproximadamente 72 millones de hectáreas, equivalente a una reducción de 6.9% de los bosques existentes en 1970. Al ritmo actual de expansión de los pastizales se calcula que en el año 2000 los pastizales podrían cubrir más de un tercio de la superficie regional, es decir unos siete millones de kilómetros cuadrados.

La expansión ganadera se reflejaba, en 1989, en una población de 317 millones de cabezas de ganado vacuno, cifra que representaba 25% del total mundial. La ganadería es de por sí una actividad de fuerte impacto ambiental, en particular cuando se lleva a cabo en regiones tropicales y en laderas, como sucede en gran parte de la expansión ganadera de la región, que se ha realizado en áreas no siempre adecuadas para la ganadería. El fuerte impacto ambiental se acentúa por el bajo nivel tecnológico.

La erosión constituye una de las formas más serias y generalizadas de degradación de suelos --a la que no escapa América Latina--, que se acentúa por la expansión incontrolada de la ganadería en zonas no aptas y la extensión de la agricultura a zonas de laderas donde el fenómeno de la erosión adquiere, en particular en ciertos países, características graves, obligando a abandonar extensas áreas. Por ejemplo, en El Salvador y

República Dominicana las tasas de erosión, medidas por el transporte de sedimentos, fluctúan entre 190 y 346 toneladas anuales por hectárea, lo que implica que en el plazo de diez años esas tierras pierden toda posibilidad de uso agrícola.

La erosión es un problema de cierta gravedad en México: 154 millones de hectáreas están afectadas por diversos grados de erosión, cifra que representa 78.3% del territorio nacional, 23.4 millones de hectáreas con erosión severa y 6.5 millones muy severa. Los fenómenos de erosión en México tienen características bien diferenciadas: en los estados áridos del norte es eólica y en el sur, hídrica. Entre los primeros, los más afectados son Sonora con 17.9% del suelo con erosión severa, Baja California Sur con 30.2% y Chihuahua con 8.5%. Oaxaca sufre erosión severa en 20% de su territorio, Tlaxcala en 19.3% y Guanajuato en 12.5%. Se calcula que la pérdida de suelos por hectárea en el país es en promedio de 2 754 toneladas, que a su vez originan 535 millones de toneladas de sedimentos, 69% de los cuales se descargan en los océanos y 31% se deposita en los embalses y presas.

Chile es otro país con serios problemas de erosión de tierras, que ha sido particularmente estudiado en lo que se denomina la Cordillera de la Costa, que sufre problemas de erosión desde los primeros tiempos de la conquista española por conversión de áreas de montaña a ganadería, extracción de leña para combustibles, uso indiscriminado del fuego y conversión a uso cerealero y hortícola. De 2.5 millones de hectáreas entre el río Aconcagua en el norte, y el Bio Bio en el sur, que abarcan nueve provincias, o las regiones V a VIII de la actual distribución regional del país, 72.5% sufren erosión moderada o severa, es decir una tercera parte de la Cordillera de la Costa. En 1979 se calculaba que 60% de las tierras cultivadas en zonas con pendientes superiores a 10% habían perdido entre 40% y 100% del

suelo productivo por erosión, principalmente hídrica.

Es notable la tendencia de la agricultura latinoamericana a la acentuada reducción de cultivos destinados al suministro local de alimentos en forma directa y su reemplazo por plantaciones o cultivos de exportación, producción de forraje o de cultivos orientados a producir alimentos balanceados. Este uso del suelo responde a una doble dinámica: por un lado, la incorporación de patrones de consumo que privilegian la proteína animal frente a la vegetal, y por otro, la necesidad de aumentar los volúmenes de exportación como alternativa frente al constante deterioro de los precios de materias primas agrícolas en los mercados internacionales. El énfasis en aumentar los cultivos de exportación se acentúa con el problema de la deuda externa y las políticas de ajuste estructural, que privilegian las actividades de exportación.

La prioridad de los cultivos de exportación se revela también por el uso de fertilizantes. El 77% del consumo latinoamericano de fertilizantes se concentra en cereales, caña de azúcar y oleaginosas. En términos de expansiones tratadas con fertilizantes, el primer lugar le corresponde a la caña de azúcar, seguida de la soya, los cítricos, los plátanos, hortalizas, papas y cereales. En Ecuador los principales usuarios de fertilizantes son el plátano y la caña de azúcar, mientras que el café y la caña de azúcar lo son en Perú y Brasil. Esto explica hechos aparentemente extraños, como que el consumo de fertilizantes en Barbados era en la década de los ochenta de 182 kilogramos por hectárea y en El Salvador de 102 kilogramos por hectárea en circunstancias que en Argentina era de sólo 3 kilogramos por hectárea.

Otra tendencia importante es la paulatina capitalización de las grandes explotaciones agropecuarias o, si se

quiere, lo que se llama modernización agrícola y que va transformando la hacienda tradicional mediante prácticas intensivas en el uso del capital y los insumos industriales, creciente tecnificación tanto en las fases de cultivo como de preparación, cosecha y pos cosecha, creciente especialización, etc. La mecanización agrícola, medida por la cantidad de hectáreas de tierra arable por tractor, fue muy rápida en el periodo 1965-1981; según la FAO el número de tractores prácticamente se duplicó, alcanzando casi el millón de unidades con aumentos notables en algunos países. Por ejemplo, en Venezuela se pasó de un tractor por cada 399 hectáreas en el primer quinquenio de los sesenta a un tractor por cada 94 hectáreas en 1982, mientras que en México había en 1982 un tractor por cada 148 hectáreas, comparadas con un tractor por cada 346 hectáreas veinte años antes.

La creciente especialización lleva a una simplificación eco sistémico que favorece procesos de deterioro y al mismo tiempo incrementa aceleradamente los riesgos frente a plagas, enfermedades o fenómenos climáticos.



(Tomado de Eurosur.org. Fotos propias)

EDITOR: ANGEL SALDOMANDO

El boletín es elaborado por el polo Latinoamérica del proyecto Reinventerra del Cirdis. Trabaja en alianza con investigadores, proyectos de investigación y centros latinoamericanos

www.cirdis.uqam

